

RE: Sustentación recurso de casación 2018-00055-02

Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 7/07/2021 6:10 PM

Para: jhlopezrincon@gmail.com <jhlopezrincon@gmail.com>

Doctor

José Hilario López Rincón

Cordialmente acuso recibido.

Atentamente,

César Armando Ramírez López
Secretario

De: José Hilario López Rincón <jhlopezrincon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 7 de julio de 2021 3:47 p. m.

Para: Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Sustentación recurso de casación 2018-00055-02

Buenas tardes.

Me permito adjuntar escrito de sustentación del recurso de casación dentro del radicado 2018-00055-02.

Cordialmente,

José Hilario López Rincón
Apoderado parte civil



Libre de virus. www.avast.com

Honorables Magistrado(a)s
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
E. S. D.

Ref.: Casación: Sentencia de 16 de abril de 2021 - Tribunal Superior Distrito Judicial de Yopal – Sala única de Decisión.

Radicación: 850013107001 **2018-00055-02**

Contra: Yaroslav Verján Gómez y Riquelme Castro Plata

Asunto: Sustentación Recurso de casación

JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.296.258 expedida en Bogotá, abogado con tarjeta profesional número 24.711 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de la parte civil, de conformidad con lo señalado en el artículo 205 y siguientes de la Ley 600 de 2000, formulo ante esa Corporación, demanda de casación, dentro del término legal, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, de fecha 16 de abril de 2021.

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES.

1.1. Procesados

YAROSLAV VERJÁN GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.649.542 expedida en Florencia (Caquetá), nació el 13 de enero de 1973 en el municipio de Puerto Rico (Caquetá).

RIQUELME CASTRO PLATA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.554.634 expedida en Bogotá, nació el 12 de agosto de 1970 en el municipio de San Juan de Arama (Meta).

1.1.1. Defensores

El enjuiciado **VERJÁN GÓMEZ** estuvo representado por el abogado JULIO CESAR ALZATE JURADO.

El enjuiciado **CASTRO PLATA** estuvo representado por el abogado ALEJANDRO DUEÑAS AGUIRRE.

1.2. Fiscalía General de la Nación

Estuvo representada por el Despacho 136 adscrito a la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos –DECVDH-, antes Despacho 3 de la Unidad Nacional contra la Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado –UNCDES-.

1.3. Ministerio Público

Estuvo representado por el Procurador 24 Judicial Penal II de Yopal (Casanare).

1.3. Parte civil

Fue reconocido como tal, el ciudadano LUIS ARMANDO RINCÓN, quien estuvo representado por quien suscribe el presente escrito.

2. LA SENTENCIA DEMANDADA

2.1. Mediante sentencia de segunda instancia, el 16 de abril de 2021, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, resolvió:

PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Yopal, de fecha 24 de julio de 2020, por las consideraciones anotadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Declarar **prescritos** los delitos de extorsión agravada consumada en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado, adelantados contra **RIQUELME CASTRO PLATA**. En consecuencia, se decreta extinta la acción penal seguida contra este procesado y la cesación del procedimiento.

TERCERO. Ordenar la libertad inmediata de Riquelme Castro Plata, en el evento de haberse producido su aprehensión, a menos que sea requerido por otra autoridad judicial. En todo caso, deberán cancelarse las boletas de detención, órdenes de captura o disposiciones similares, que hubiere librado el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Yopal, con ocasión del presente proceso. Tal actuación habrá de ser cumplida por el a quo.

CUARTO. Declarar **prescrito** el delito de concierto para delinquir agravado, adelantado contra Yaroslav Verján Gómez. En consecuencia, se revoca la condena impuesta a este ciudadano, por este delito y se decreta la cesación del procedimiento.

QUINTO. Modificar los numerales 2º, 3º y 5º de la parte resolutive de la decisión apelada, los cuales quedarán así:

SEGUNDO. Condenar a YAROSLAV VERJAN GOMEZ, de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, a la pena principal de **360 meses de prisión y multa de 1750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al haberlo hallado penalmente responsable de las conductas punibles de extorsión agravada consumada en concurso homogéneo con extorsión agravada tentada, ambas en calidad de coautor mediato y en concurso heterogéneo con deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, en calidad de coautor, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.**

TERCERO. Condenar a YAROSLAV VERJAN GOMEZ a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, de acuerdo a lo normado en los artículos 51 y 52 del Código Penal. (...) QUINTO. Condenar a término de los artículos 46, 56-4 de la Ley 600 de 2000 y 96 y 97 del Código Penal, como indemnización de perjuicios morales

causados con la infracción del constreñimiento, amenazas, miedo, despojo de sus bienes y desplazamiento que sufrió la víctima LUIS ARMANDO RINCÓN, por el hoy condenado YAROSLAV VERJAN GOMEZ, se hace merecedor de imponerle como daños morales, la suma equivalente, en moneda nacional, de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos a favor de la víctima, señor Luis Armando Rincón.

SEXTO. Confirmar los apartes no revocados ni modificados de la sentencia apelada.

SÉPTIMO. Ordenar la expedición de copias de esta decisión a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, de acuerdo a lo dispuesto en el acápite de 'otras determinaciones' de esta providencia.

OCTAVO. Contra la presente sentencia procede el recurso de casación.

NOVENO. Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

2.2. En Sala Única de decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, llegó a la decisión que antecede, con base en las siguientes **conclusiones:**

[...] en la fase de instrucción se configuró la prescripción de la acción penal de los delitos investigados [...] Para responder este reproche, es necesario determinar la normativa aplicable al conteo de prescripción. Sobre este punto, se advierte que se procede por sucesos ocurridos desde 1995 hasta la actualidad, respecto de los cuales, estuvieron en vigencia los códigos penales creados con el Decreto 100 de 1980 y la Ley 599 de 2000.

Respecto de la extorsión y el concierto para delinquir agravados, fueron reprochados por episodios ocurridos en rigor del Decreto 100 de 1980, cuyo artículo 80 consagra el término de prescripción de la acción penal de la siguiente manera:

Término de prescripción de la acción penal. *La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años **ni excederá de veinte.** Para este efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes. En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción prescribirá en cinco años. (Subrayado no es parte del texto original)¹*

[...] Fijada la fecha en que ocurrió la interrupción prescriptiva, abordaremos cada de (sic) uno de los delitos endilgados, con el propósito de establecer si se configuró la figura extintiva plurimencionada. En este punto no se comparte la propuesta de la censura, relacionada con que se tenga el año de 1995 como la fecha en que inicia el conteo de la prescripción, pues los injustos enrostrados tienen marcos temporales diferentes y no en todos los casos, su cálculo empezó en el año pregonado por el apelante. Adicionalmente, conforme al artículo 83 del Código Penal de 1980, el inicio del término de prescripción debe contarse desde el día de

¹ Página 8 de la sentencia de segunda instancia.

su consumación, en los hechos punibles instantáneos y, a partir del último acto en los reatos tentados y permanentes.²

[...] Si se considera que la extorsión agravada consumada se cometió a finales de 1997 -a lo sumo el 31 de diciembre de ese año- y la resolución de acusación cobró firmeza el 7 de febrero de 2018, se concluye que operó la prescripción de la acción penal en ese interregno, al haber transcurrido más de los 20 años referidos en el artículo 80 del Decreto 100 de 1980, lo cual impone declarar la prescripción de este delito para Riquelme Castro Plata.

De otro lado, el *concierto para delinquir agravado* que ocupa la atención de esta colegiatura fue tomado por la Fiscalía del artículo 186 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 4º de la Ley 589 de 2000, el cual en su inciso 3º señala un tope de sanción privativa de la libertad de 15 años. Aunque se atribuyó este delito con un agravante, la Sala -al igual que la primera instancia- no lo tendrá en cuenta, pues no se especifica la circunstancia gravosa a la que se hace alusión.³ (Subrayas fuera de texto)

Atendiendo que (i) se trata de una conducta punible de ejecución permanente achacada a los 2 procesados; (ii) que la empresa delictual consistió en una organización armada dedicada a extorsiones monetarias sucesivas a cambio de dejar trabajar a la víctima en sus tierras y no acabar con su vida y la de su familia, cuyo acto cumbre fue el desplazamiento forzado del perjudicado y posterior apoderamiento de sus inmuebles; (ii) que el marco factual se ubica de 1995 al 6 de julio de 2001 -en que se realizó la escritura pública de la finca “La Argentina”-, se tendrá ese día como el momento en que empezó a contarse el plazo prescriptivo. En ese orden, al añadir a esa data, los 15 años del reato por el que se procede, se tiene que para el 6 de julio de 2016 no había cobrado ejecutoria el escrito de acusación, que se itera, quedó en firme el 7 de febrero de 2018. Así las cosas, se declarará prescrito para ambos procesados el concierto para delinquir agravado.⁴ (Subrayas fuera de texto)

[...] Como no se ha configurado la causal que habilita el cálculo de extinción de la acción penal, es inane el examen de delito de lesa humanidad pedido por la parte civil, en orden a declarar la imprescriptibilidad de este injusto.⁵

[...] Prosiguiendo este derrotero, efectivamente la sentencia apelada se emitió en un juicio viciado, que se produjo en la fase de instrucción, cuando operó la prescripción parcial de los delitos investigados; irregularidad sustancial que no se convalida con la pasividad de las partes ni el paso del tiempo, porque la producción de este fenómeno jurídico sobrellevó la pérdida de potestad del ejercicio de la acción penal por parte del Estado.

En suma, se declararán prescritos los delitos de extorsión agravada consumada en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado, acusados a Riquelme Castro Plata. Se constata la misma figura para Yaroslav Verján Gómez por el delito de concierto para delinquir agravado.⁶

² Ibídem, página 9

³ Ibídem, página 10

⁴ Ibídem, página 11

⁵ Ibídem, página 11

⁶ Ibídem, página 12

3. SÍNTESIS DE LOS HECHOS MATERIA DE JUZGAMIENTO.

3.1. Los hechos que fueron materia de denuncia por parte del ciudadano LUIS ARMANDO RINCÓN, tienen que ver con las extorsiones, amenazas de muerte, desplazamiento forzado y despojo de sus predios que conformaban la hacienda “La Argentina”, situados en el municipio de Trinidad (Casanare); conductas todas ellas atribuidas a los grupos paramilitares que operaron en la región y en el país.

3.2. El ciudadano LUIS ARMANDO RINCÓN se radicó en el municipio de Trinidad (Casanare) aproximadamente desde el año 1965, época en la cual adquirió por compra las mejoras y posesión sobre el predio rural llamado “La Argentina”.

3.3. Desde el momento de su adquisición, LUIS ARMANDO RINCÓN se dedicó de manera laboriosa y permanente a la explotación económica de su predio, especialmente en el área de la ganadería.

3.4. Hacia finales de la década de 1980, LUIS ARMANDO RINCÓN empezó a ser objeto de extorsiones y amenazas contra su vida por parte de los denominados grupos paramilitares que operaron en la región, ante la mirada silenciosa de las diferentes autoridades, llamadas a proteger la vida y bienes de sus asociados.

3.5. En diversas ocasiones, miembros de los paramilitares ocuparon la finca “La Argentina”, en contra de la voluntad del demandante, como medida de presión para obligarlo a pagar extorsiones.

3.6. A finales de 1997 LUIS ARMANDO RINCÓN fue “notificado” por parte del paramilitar alias “IVAN” – RIQUELME CASTRO PLATA – que “por ser auxiliador de la guerrilla” debía pagar la suma de 15 millones de pesos.

3.7. El 23 de mayo de 1998 un grupo de paramilitares ocupó la finca “La Argentina” y destruyó con bombas y granadas parte de las instalaciones y de la casa. Así mismo saquearon todo lo que pudieron llevar y ordenaron a los trabajadores desocupar la finca. Esto como represalia porque el ciudadano RINCON no realizó el pago de una extorsión.

3.8. Bajo el terror de las amenazas, en el segundo semestre de 1998 entregó al grupo paramilitar la suma de 30 millones de pesos y el 15 de diciembre de 1998 la suma de 60 millones de pesos. Además, quedó “debiendo” la suma de 30 millones de pesos.

3.9. En “entrevista” con JESÚS EMIRO PEREIRA RIVERA, alias “Alfonso” o “Huevoepisca”, jefe de finanzas del grupo paramilitar que operaba en la zona y lugarteniente de VICENTE CASTAÑO alias “El Profe”, aquel le manifestó al ciudadano LUIS ARMANDO RINCÓN que “no debía 30 millones sino 700 millones de pesos” y que “tenía plazo hasta el 31 de diciembre de 2000 para pagarlos”.

3.10. Como LUIS ARMANDO RINCÓN no cumplió con el pago el 31 de diciembre de 2000, catorce días después, el 14 de enero de 2001, cerca de 50

paramilitares al mando de alias “ALCIDES” y “MATEO”, subordinados de JESÚS EMIRO PEREIRA RIVERA, alias “Alfonso”, ocuparon definitivamente la finca “La Argentina” y ordenaron a los trabajadores y demás personas que allí se encontraban desocuparla de inmediato pues esa finca “quedaba confiscada y era propiedad de ellos”.

3.11. Bajo la presión de las circunstancias relatadas, LUIS ARMANDO RINCÓN fue despojado de sus tierras y desplazado de la región, viéndose forzado a realizar la “venta” de la totalidad de sus propiedades.

3.12. El 11 de abril de 2008, LUIS ARMANDO RINCÓN formuló denuncia penal por los hechos que originaron su desplazamiento forzado y la “venta” de sus propiedades.

4. SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL

4.1. Tras librar órdenes de captura contra los procesados, las cuales en su oportunidad no se hicieron efectivas, la Fiscalía Tercera Delegada Especializada ante la Unidad Nacional contra la Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado “UNCDES”, el 31 de mayo de 2013, los declaró personas ausentes.⁷

4.2. Por los hechos brevemente narrados en el acápite anterior, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación el 15 de abril de 2016, en contra de **NELSON VERJÁN GÓMEZ** (actualmente **YAROSLAV VERJÁN GÓMEZ**), por los delitos de extorsión agravada consumada y tentada, en concurso con deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y concierto para delinquir agravado; y en contra de **RIQUELME CASTRO PLATA**, por los delitos de extorsión agravada consumada en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado.

4.3. La etapa del juicio se adelantó en el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Yopal (Casanare), despacho judicial que señaló el 14 de febrero de 2013 para llevar a cabo la audiencia preparatoria que establece el artículo 401 de la Ley 600 de 2000; el 13 de septiembre de la misma anualidad culmina la audiencia pública y el 24 de julio de 2020 dicta sentencia condenatoria.

4.4. En contra de la sentencia de primera instancia, los defensores de los procesados interpusieron recurso de apelación y, en consecuencia, el proceso fue remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, siendo repartido a la Magistrada GLORIA ESPERANZA MALAVER DE BONILLA.

4.5. Mediante sentencia de segunda instancia, fechada 16 de abril de 2021, el Tribunal Superior de Yopal decidió revocar parcialmente la sentencia.

5. ENUNCIACIÓN DE LA CAUSAL Y FORMULACIÓN DEL CARGO. FUNDAMENTOS Y NORMAS QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS.

⁷ C.O. 5 Folios 18-20

5.1. PRIMERO. Me permito invocar la causal primera contemplada en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, en la modalidad de violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 80 del decreto 100 de 1980, lo que condujo a ignorar los artículos 29 y 93 de la Constitución Política, el artículo 332 de la Ley 600 de 2000, así como normas y tratados internacionales de protección de derechos humanos, ratificados por el Estado colombiano, tales como: los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma.

Fundamentos de la causal

Según la sentencia del Tribunal y en relación con el delito de concierto para delinquir agravado, *se debe aplicar* el artículo 80 del decreto 100 de 1980, y el término de prescripción *ha de contarse a partir del 6 de julio de 2001*. Para tal efecto señaló:

En ese orden, al añadir a esa data, los 15 años del reato por el que se procede, se tiene que para el 6 de julio de 2016 no había cobrado ejecutoria el escrito de acusación, que se itera, quedó en firme el 7 de febrero de 2018. Así las cosas, se declarará prescrito para ambos procesados el concierto para delinquir agravado.
(Subrayas fuera de texto)

Sin embargo, tal decisión es equivocada por las siguientes razones:

- i) ignora el artículo 29 de la Constitución Política, que obliga a respetar el debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;
- ii) desconoce el artículo 93 superior que consagra la prevalencia, en el orden interno, de los *tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos*; y establece que, la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Carta, *se interpretarán* de conformidad con dichos tratados y convenios.
- iii) desatiende el artículo 332 de la ley 600 de 2000 que dispone que el imputado “quedará vinculado al proceso una vez sea escuchado en indagatoria o declarado persona ausente”. (Subraya fuera de texto)

De acuerdo con el expediente, la Fiscalía Tercera Delegada Especializada ante la Unidad Nacional contra la Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado “UNCDES”, declaró personas ausentes a los dos enjuiciados el 31 de mayo de 2013, fecha desde la cual debía contabilizarse el término de prescripción, según los parámetros del artículo 332 referido.

Sobre el concepto de *bloque de constitucionalidad*, que el Tribunal pasó por alto, la Corte Constitucional⁸ tiene dicho:

También hacen parte integrante y principal del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales que consagran derechos humanos intangibles, es decir, cuya conculcación está prohibida durante los Estados de Excepción; así como también integran el bloque, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución

⁸ C-067-2003

Política, los convenios sobre derecho internacional humanitario, como es el caso de los Convenios de Ginebra.

En cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano, es su obligación **investigar, juzgar y sancionar** las graves violaciones de derechos humanos y **eliminar la impunidad**, atendiendo los estándares internacionales, para cuyo fin y según la Corte Suprema de Justicia⁹, los funcionarios judiciales deberán acudir a la normatividad interna y a *“aquella integrada en el bloque de constitucionalidad y las decisiones proferidas por organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”*.

Acerca del concierto para delinquir relacionado con los crímenes de lesa humanidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia¹⁰ puntualizó:

[...] Tomando en consideración los anteriores factores relevantes, **la Corte no duda en señalar que las graves conductas cometidas por los paramilitares deben enmarcarse, primordialmente, dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad**, pues el ataque perpetrado contra la población civil adquirió tales dimensiones de generalidad y sistematicidad, que alteró de manera significativa el orden mismo de civilidad, implicando el desconocimiento de principios fundamentales del orden social imperante. (Negrilla fuera de texto)

Los asesinatos, torturas, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, violaciones, y en fin las múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos confesadas hasta el momento por los desmovilizados de esos grupos armados que han sido escuchados en versión libre en el trámite del procedimiento señalado en la ley 975 de 2005, no dejan duda que se configuran las características esenciales que delinean los delitos de lesa humanidad, en los términos aquí analizados”.

En conclusión, el concierto para delinquir, cuando guarda conexidad con delitos de lesa humanidad, alcanza el mismo paradigma para todos los efectos jurídicos. (Negrilla fuera de texto)

Ello, porque la pluralidad de punibles en que incurren organizaciones armadas ilegales, como las autodefensas, sus facciones o afines, o grupos paramilitares, cuando alcanzan sistematicidad y las otras características, pueden erigirse en delitos de lesa humanidad.

Y añadió, que el término de prescripción comienza a correr a partir de la vinculación al proceso:

En el marco del derecho internacional, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es norma de ius cogens, reconocida y aplicada por el Estado colombiano y los tribunales supranacionales.

⁹ Auto del 21 de septiembre de 2009. Radicado 32022, M.P. Sigifredo Espinosa.

¹⁰ Auto AP-2230 del 30 de mayo de 2018, Número de proceso 45110, ID 639689

[...] En ese contexto, los delitos de lesa humanidad no prescriben y el Estado tiene la obligación de adelantar su investigación y juzgamiento en cualquier tiempo.

La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad consiste en que el Estado tiene la potestad y el deber de investigarlos sin límite en el tiempo. Sin embargo, no se trata de una prerrogativa absoluta, toda vez que la persona que ya ha sido vinculada a la investigación mediante indagatoria o declaración de persona ausente, bajo el régimen de la Ley 600 de 2000, no puede permanecer indefinidamente atada al proceso, a la espera de las resultas del trámite. **En tales hipótesis, los términos de prescripción de la acción penal empiezan a correr desde el momento de la vinculación al proceso.** (Negrilla fuera de texto)

Al respecto, la Sala en decisión de 21 de septiembre de 2009, dentro del radicado 32022, acotó:

“ii) Es perfectamente factible que algunos delitos, particularmente los de lesa humanidad, gocen de la posibilidad de que su investigación sea imprescriptible. iii) Empero, cuando respecto de esos hechos ya existe una persona individualizada y formalmente vinculada al proceso (no basta con el cumplimiento de una sola condición, vale decir, se tienen que conjugar la individualización y la formal vinculación, para que se repunte existente el derecho del procesado), respecto de ella no opera la imprescriptibilidad.

Es factible, entonces, que un delito de lesa humanidad reporte como tal la condición de imprescriptibilidad en su investigación, pero acerca de personas determinadas -individualizadas y formalmente vinculadas- exija el cumplimiento de los términos de investigación y juzgamiento.”.

A este respecto, es necesario precisar aquí que el artículo 332 de la Ley 600 de 2000, acerca de la vinculación formal al proceso, estipula:

“El imputado quedará vinculado al proceso una vez sea escuchado en indagatoria o declarado persona ausente”.

De otro lado, la caracterización de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no contraviene la vigencia de los principios de tipicidad y estricta legalidad de los delitos y de las penas. Esto por cuanto, mientras no se produzca la vinculación formal del implicado no acaecerá el fenómeno de la prescripción y, a pesar del paso del tiempo y la evolución normativa, el nomen iuris y las sanciones a que haya lugar serán las que correspondan a las vigentes al tiempo de los hechos, salvo norma favorable posterior». (Subrayas fuera de texto)

En idéntico sentido, la Corte Suprema de Justicia¹¹ viene aplicando la *Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad*:

De otra parte, esta Sala Penal en varias oportunidades ha venido haciendo esa preferente aplicación de la Convención, no obstante que nuestro país no la ha suscrito ni ratificado. Al respecto, en la audiencia preparatoria se citó (CSJ AP, 22 sep. 2010, rad. 30380):

¹¹ Sentencia SP3240-2015, proceso número 36828, Magistrado ponente Eyder Patiño Cabrera

“...pese a que Colombia no ha suscrito la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, firmada el 26 de noviembre de 1968 y con entrada en vigor mundial el 11 de noviembre de 1970, es evidente que tal normativa integra la más amplia noción de ius cogens [conjunto de preceptos inderogables, imperativos (no dispositivos) e indisponibles, con vocación universal, cuya no adhesión por parte de un Estado no lo sustrae de su cumplimiento como compromiso erga omnes adquirido para prevenir y erradicar graves violaciones a los derechos humanos que desconocen la humanidad y su dignidad].

Así las cosas, se insiste que el ius cogens, como grupo de normas de derecho consuetudinario internacional, pueden ser aplicadas en Colombia por virtud de la cláusula de prevalencia de los instrumentos internacionales referidos a los derechos humanos, también conocido como bloque de constitucionalidad (art. 93), el cual no está condicionado a la existencia de un vacío normativo, sino que por orden constitucional es una herramienta de interpretación judicial.”

La equivocada interpretación que hace el Tribunal es de tal magnitud que, inclusive, lo llevó a desatender la solicitud de declarar que el delito de desplazamiento forzado reviste la categoría de crimen de *lesa humanidad*, que, además, según la ley 1719 de 2014, era su *deber*, bajo el argumento de que ese “injusto” no ha prescrito.

La Corte Suprema de Justicia¹² ha dicho de manera clara que:

[...] El Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales (tratados, convenios, aceptación del ius cogens) en ámbitos regionales y universales, a través de los cuales se obliga a luchar decididamente contra los delitos de lesa humanidad y a evitar que las acciones penales derivadas de ellos prescriban.

La materialización de esos deberes al interior del país involucra a diversas autoridades; entre ellas, las estrictamente judiciales y la Fiscalía General de la Nación, a quienes corresponde declarar cuándo una manifestación delictual se cataloga como de lesa humanidad.

La Sala de Casación Penal, como autoridad judicial que es, también tiene competencia para declarar si los hechos investigados se refieren a delitos que se catalogan como crímenes de lesa humanidad.

“(...) La declaración de crimen de guerra o crimen de lesa humanidad es un acto de connotación judicial (léase de autoridad judicial) que bien puede hacerlo el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que cumple el papel de acusador, o bien el juez del conocimiento en cualquier oportunidad, a instancia del Ministerio Público o por petición de un ciudadano...”.

Cualquier asomo de discusión al respecto fue zanjado con la expedición de la Ley 1719 de 2014, en tanto expresamente determinó que en la autoridad judicial radica la competencia para declarar que un delito es de lesa humanidad. En su artículo 15, inciso 2°, en efecto, se dispuso:

¹² Auto AP2230-2018 de 30 de mayo de 2018

“La autoridad judicial competente que adelante la investigación y el juzgamiento, **deberá declarar** que la(s) conducta(s) por la cual se investiga o juzga es de lesa humanidad, **cuando así se establezca**.”. (Negrilla fuera de texto)

Y para ahondar, aún más en el tema, la Corte¹³ ha reiterado que, si bien algunos delitos no se han enlistado en un texto normativo como crímenes de lesa humanidad, como es el caso del concierto para delinquir,

cuando están íntimamente relacionados con comportamientos punibles que revisten esa connotación, adquieren el mismo carácter y siguen idénticas consecuencias, tales como la universalidad de la jurisdicción y la imprescriptibilidad.

Así ocurre con el delito de concierto para delinquir, que abarca la actividad de estructuras paramilitares y/o autodefensas, cualquiera sea su objetivo o denominación, cuando las transgresiones cometidas comprenden ataques contra algún sector de la población civil y se reúnen los elementos de generalidad y sistematicidad.

Sin mayor esfuerzo, salta a la vista que el Tribunal ignoró el bloque de constitucionalidad, lo que lo llevó a desconocer los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano (artículos 93 y 214 de la Carta Política) y que conforman el *ius cogens*, ignorando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles; además, desconoció el mandato del artículo 332 de la ley 600 de 2000 acerca del momento en el cual se da la vinculación del procesado a la investigación; esa suma de desaciertos lo llevaron, a su vez, a aplicar de manera indebida el artículo 80 del decreto 100 de 1980, y a declarar prescrito el delito de concierto para delinquir agravado que se les imputó a los encartados **VERJAN GÓMEZ** y **CASTRO PLATA**. Que, si tales equivocaciones no hubiesen sido cometidas, no se habría decretado la prescripción.

En resumen, el Tribunal yerra al invocar indebidamente el artículo 80 del decreto 100 de 1980 en virtud de que, como se analizó, no tuvo en cuenta que el término para efectos de la prescripción debía contarse a partir de la fecha en que los enjuiciados fueron vinculados formalmente al proceso a través de la declaratoria de personas ausentes, es decir el 31 de mayo de 2013; ignoró que las graves conductas cometidas por los grupos paramilitares deben encuadrarse en el contexto de crímenes de lesa humanidad y, consecuentemente, pasó por alto el artículo 93 de la Carta Política y, por ende, las obligaciones supranacionales del Estado colombiano de impedir la impunidad en casos de delitos de lesa humanidad; tal sumatoria de yerros lo llevaron a declarar la prescripción “*para ambos procesados el concierto para delinquir agravado*”.

5.2. SEGUNDO. Invoco la causal primera contemplada en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, en la modalidad de violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 186 del decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 4º de la ley 589 de 2000, lo que condujo a ignorar el artículo

¹³ AP-2230-2018

332 de la Ley 600 de 2000, los artículos 93, y 214 de la Constitución Política, así como normas y tratados internacionales de protección de derechos humanos, ratificados por el Estado colombiano, tales como: los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma. Y, corolario de lo anterior, a aplicar de manera errada, el artículo 80 de la ley 100 de 1980.

Fundamentos de la causal

Al valorar la responsabilidad penal de los encartados, el Tribunal yerra al entender de manera equivocada la norma seleccionada para regular el caso sometido a su consideración. Si bien es cierto el artículo 186 está debidamente escogido, su interpretación es desacertada en tanto el juez de segunda instancia mengua su contenido o alcance.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal, “el *concierto para delinquir agravado* que ocupa la atención de esta colegiatura fue tomado por la Fiscalía del artículo 186 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 4° de la Ley 589 de 2000, el cual en su inciso 3° señala un tope de sanción privativa de la libertad de 15 años. Aunque se atribuyó este delito con un agravante, la Sala -al igual que la primera instancia- no lo tendrá en cuenta, pues no se especifica la circunstancia gravosa a la que se hace alusión.¹⁴ (Subrayas fuera de texto)

Contrario a lo que afirma el Tribunal, el juez de primera instancia sí juzgó y condenó al procesado **CASTRO PLATA**, “por los delitos de **EXTORSIÓN AGRAVADA CONSUMADA**, en concurso heterogéneo con el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO**”.

Y, al procesado **VERJAN GÓMEZ**, por las conductas de **EXTORSIÓN AGRAVADA CONSUMADA**, **EXTORSIÓN AGRAVADA TENTADA**, **DEPORTACIÓN**, **EXPULSIÓN**, **TRASLADO o DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO**”.

Es decir que el juez de primera instancia contempló el agravante previsto en el inciso 3° del artículo 4° de la ley 589 de 2000, que no es otro que la realización de la conducta dirigida a “cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado [...] extorsión [...]”.

No obstante, ninguna de las instancias tuvo en cuenta el inciso 4° que aumenta la pena para quienes “organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir”; cualidades que conforme a las pruebas obrantes en el proceso se predicen para los dos enjuiciados, quienes ostentaban la calidad de organizadores, fomentadores, promotores, dirigentes, cabecillas, dentro del denominado Bloque Centauros, en su condición de jefes de finanzas¹⁵.

¹⁴ Ibidem, página 10

¹⁵ Según el expediente de la Fiscalía y la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Magistrada Ponente: ALEXANDRA VALENCIA MOLINA. Bogotá D.C., 25 de julio de 2016. **Radicación:** 110016000253200783019 N.I. 1121. ESTRUCTURA PARAMILITAR DEL BLOQUE CENTAUROS Y HÉROES DEL LLANO Y DEL GUAVIARE.

Además, el Tribunal afirma:

i) la existencia de las «autodefensas» en el periodo 1995-2005, constituyó un hecho de conocimiento público.

ii) parte de los objetivos de esa estructura criminal “fue la comisión de extorsiones a ganaderos, el desplazamiento forzado y el apoderamiento de tierras de la zona, para financiarse”.

El Tribunal acepta que la existencia de las «autodefensas» fue un hecho de público conocimiento y que esas estructuras criminales tenían como objetivos extorsionar, **desplazar** y despojar de sus tierras a los campesinos. Sin embargo, el Tribunal no tuvo en cuenta que el delito de desplazamiento forzado es un crimen calificado de *lesa humanidad* atributo que también debe cobijar el concierto para delinquir agravado que se les imputó en su momento a los dos encartados.

El Tribunal, de manera contradictoria, y a pesar de las premisas que preceden, afirma en la misma sentencia *“que la empresa delictual consistió en una organización armada dedicada a extorsiones monetarias sucesivas a cambio de dejar trabajar a la víctima en sus tierras y no acabar con su vida y la de su familia, cuyo acto cumbre fue el desplazamiento forzado del perjudicado y posterior apoderamiento de sus inmuebles”*.

Como puede verse, saca de contexto los hechos y los presenta como si hubiesen sido ajenos a la violencia desatada por las estructuras paramilitares en un marco de violación sistemática y generalizada de derechos humanos, cometida contra la población civil. Como si la violencia desatada hubiese sido apenas a cambio de “dejar trabajar a la víctima”.

Tal equivocación conduce a ignorar y minimizar la gravedad de las conductas criminales cometidas por los grupos paramilitares, al punto que las mismas deben ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad, como en efecto lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Suprema de Justicia¹⁶:

1.3.2.2. En cuanto se refiere al tipo penal de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, es claro que, desde su inicial consagración -Decreto 1194 de 1989- bajo la denominación jurídica de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, tuvo por objeto el reproche penal, en su modalidad agravada, por la cualificación del punible a ejecutar, todo aquel convenio entre varias personas, con cierta vocación de permanencia, destinado a consumir delitos indeterminados.

Por eso y porque los grupos armados al margen de la ley constituidos, tradicionalmente, para combatir desde la esfera privada el fenómeno insurgente, se dedicaron a cometer conductas punibles de gran envergadura, lesivas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, su comportamiento debe adecuarse a la primera de las dos modalidades agravadas, cuando quiera que el autor o partícipe se hubiere asociado para cometer las infracciones descritas en el inciso 2º o, a ambas, si la función del sujeto activo era la de organizar, fomentar,

¹⁶ CSJ SCP SP3240 – 2015 (36828)

promover, dirigir, encabezar, constituir o financiar la asociación criminal.
(Subrayas fuera de texto)

Ahora, con la supresión, en el inciso 2º del canon 340, de la finalidad específica de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley (artículo 19 de la ley 1121 de 2006), hipotéticamente pareciera posible que el concierto con fines de paramilitarismo también pudiera subsumirse en el inciso 1º, que es de textura abierta, no obstante, ello es bastante remoto o prácticamente imposible si se considera que las estructuras criminales paramilitares, tradicionalmente, se conformaron, justamente, para la comisión de los delitos descritos en el inciso 2º (genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas).

Esta es la razón por la que la jurisprudencia de esta Corporación (CSJ AP, 10 abr. 2008, rad. 29.472, reiterado en CSJ AP 31, ag. 2011, rad. 36.125, CSJ AP, 7 nov. 2012, rad. 39.665), **con criterio invariable, ha sostenido que la modalidad paramilitar del concierto para delinquir, debe ser catalogada como una infracción de lesa humanidad**, siempre que se cumplan unos específicos supuestos, como pasa a verse:

Teniendo en cuenta que los reatos ejecutados por los postulados se refieren a desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, homicidios por razones políticas, etc., y como dichos punibles se entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad, tal valoración se debe extender al denominado concierto para delinquir agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó con tales propósitos.

Destaca la Sala que el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional ha tenido en cuenta no sólo la conducta del autor o de los partícipes sino que también ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad, lo cual significa que también deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir agravado.

Para llegar a considerar a los responsables de concierto para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad deben estar presentes los siguientes elementos:

- (i) Que las actividades públicas de la organización incluyan algunos de los crímenes contra la humanidad;*
- (ii) Que sus integrantes sean voluntarios; y*
- (iii) Que la mayoría de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser concientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización,*

Bases a partir de las cuales varios tribunales internacionales y nacionales consideran que el concierto para cometer delitos de lesa humanidad también debe ser calificado

como punible de la misma naturaleza, como lo determina la Corte en este momento para el caso colombiano y con todas las consecuencias que ello implica.

Ha de agregarse que al ordenamiento jurídico nacional han sido incorporados diferentes tratados y convenciones, bien por anexión expresa o por vía del bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución Política), que permiten constatar que el concierto para delinquir sí hace parte de los crímenes de lesa humanidad. (CSJ AP, 10 abr. 2008, rad. 29.472)

En ese sentido, no se puede perder de vista que la incorporación jurisprudencial del concierto para delinquir en la categoría de delitos de lesa humanidad no es el único parámetro para definirlo como tal, sino que en cada caso se debe analizar el designio o finalidad criminal de la asociación ilícita. Así lo concluyó en pasada oportunidad la Corte (CSJ AP, 7 nov. 2012, rad. 39.665):

Corresponde precisar que la taxatividad o la expresa mención del delito de concierto o asociación para delinquir en el catálogo de delitos de lesa humanidad, no puede ser el único criterio determinante para reputarlo o excluirlo como tal, sino que en tal ejercicio deben concurrir el estudio de las finalidades y propósitos de dicho concierto o de dicha asociación ilícita, nótese que el artículo 7 del Estatuto de Roma, condiciona siempre la susodicha cualificación a los objetivos o finalidades de las conductas ilícitas, esto es, que sean "parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil". De manera que sobre tal punto debe girar el calificativo que se le dé (sic) al delito de concierto para delinquir como de lesa humanidad, lo que impone el estudio de las circunstancias de cada caso en concreto. En términos generales puede concluirse que el delito referido será de lesa humanidad, cuando los hechos punibles que se cometan por motivo o con ocasión de la ilícita asociación, comprendan ataques generalizados o sistemáticos a la población civil. (Negrilla fuera de texto)

1.3.2.3. Todas estas precisiones se ofrecen necesarias, inicialmente, para reiterar, como consistentemente lo ha venido haciendo la jurisprudencia (CSJ AP, 24 ene. 2006, rad. 24.812), que el delito de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, tiene su análogo en el de concierto para delinquir, agravado, consagrado en el artículo 340 del Código Penal (incisos 2º y 3º), pues la asociación criminal paramilitar regularmente ha tenido por fin la comisión de los injustos relacionados en el inciso 2º y, según se trate de directivos o de los encargados de financiarla, las conductas descritas en el inciso 3º.

El Tribunal yerra en el momento de interpretar el artículo 186 del decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 4º de la ley 589 de 2000, toda vez que restringe su alcance, particularmente sus incisos 3º y 4º que disponen:

Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, **desplazamiento forzado**, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, **extorsión** o para **organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley**, la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Negrillas fuera de texto)

La pena se aumentará del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal aciertan en la escogencia de la norma que gobierna la conducta estudiada: artículo 186 del decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 4° de la ley 589 de 2000 en lo relacionado con el *concierto para delinquir agravado*.

A pesar de lo anterior, el Tribunal interpreta de manera equivocada el alcance de dicha norma en tanto se mengua, se disminuye, su contenido o alcance. Y tras ese yerro, ignora los artículos 93 y 214 de la Carta Política, el artículo 332 de la ley 600 de 2000, así como normas y tratados internacionales de protección de derechos humanos, ratificados por el Estado colombiano.

Y, corolario de lo anterior, aplica de manera errada, el artículo 80 de la ley 100 de 1980.

En resumen, el Tribunal se equivoca al interpretar de manera limitada el artículo 186 del decreto 100 de 1980 modificado por el artículo 4° de la ley 589 de 2000, toda vez que no tuvo en cuenta que la conducta de los encartados se encuadra dentro del inciso 4° de dicha norma y al no tener en cuenta tal circunstancia, consideró que la pena máxima a imponer era de 15 años, dejando de aplicar el aumento previsto – del doble al triple – en el inciso 4°, que hubiese aumentado la pena, y sobre esa equivocación consideró viable aplicar el artículo 80 de la ley 100 de 1980.

Si hubiese interpretado debidamente la norma, hubiese contemplado un término de 20 años para efectos de la prescripción, y no de 15 años como en efecto lo hizo. Como el Tribunal asume que el término de prescripción comienza el 6 de julio de 2001, y el escrito de acusación quedó en firme el 7 de febrero de 2018, en consecuencia, la prescripción de 20 años operaría el 6 de julio de 2021 y no el 6 de julio de 2016; ello sin tener en cuenta que la conducta de los enjuiciados encuadra en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

PETICIÓN

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia casar la sentencia acusada, proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, con fecha 16 de abril de 2021, y en su lugar dictar la que corresponda, conforme a las súplicas de la demanda.

De ustedes, respetuosamente,



JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
C. C. N° 19.296.258 Bogotá
T. P. 24.711 C. S. de la J.
jhlopezrincon@gmail.com